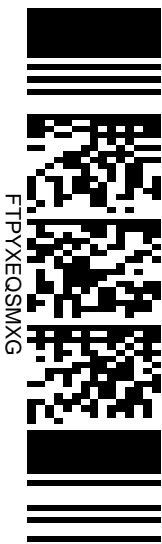


Antofagasta, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos autos **Rol ingreso Corte 617-2022**, que corresponde al RIT T-402-2021, RUC 2140363307-8, del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, por sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, se acogió, sin costas, la demanda por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido deducida por MELISSA VALENTINA MATTHEWS GODOY, ANDRÉS MICHAEL ESPINOZA LORCA, MATÍAS JAVIER HERNÁNDEZ FARIÁS, JOSÉ ANTONIO SALAZAR FERNÁNDEZ y ADOLFO JULIÁN MONTEIROT ZOESON, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, declarándose que la denunciada ha vulnerado el derecho fundamental a la honra de los demandantes con ocasión de la desvinculación, y se le condenó a pagar el equivalente a seis remuneraciones: 1.- A Melissa Valentina Matthews Godoy, \$8.777.694; 2.- A Andrés Michael Espinoza Lorca, \$12.280.176; 3.- A Matías Javier Hernández Farías, \$7.502.910; 4.- A José Antonio Salazar Fernández, \$12.280.176; y 5.- A Adolfo Julián Monteiro Zoeson, \$12.280.176; disponiéndose que las sumas ordenadas a pagar deberán serlo con los reajustes e intereses que se indica en artículo 63 del Código del Trabajo.

En contra de esta sentencia el abogado FELIPE JULIO ARAYA, por la parte demandada, dedujo recurso de nulidad fundado en la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, referida a la infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo



dispositivo del fallo, y en la causal de la letra b) del artículo 478 del referido código, la que se invoca en forma subsidiaria.

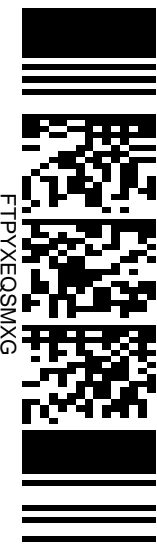
También recurrió, por la parte demandante, el abogado JORGE MAYNE MOLLER, quien invocó la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, referida a la infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, en la audiencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, oportunidad en que se escucharon los alegatos de las partes.

CONSIDERANDO.

En cuanto al recurso de la demandada I. Municipalidad de Antofagasta.

PRIMERO: Que la recurrente funda la nulidad de la sentencia, de modo principal, en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por errónea aplicación de ley, señalando que el fallo recurrido ha infringido el artículo 1° del Código del Trabajo al ser aplicado indebidamente a la causa de autos, y con ello, no aplicar a la controversia el resto de la normativa laboral, toda vez que el artículo en comento establece que: *"Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias, estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un*

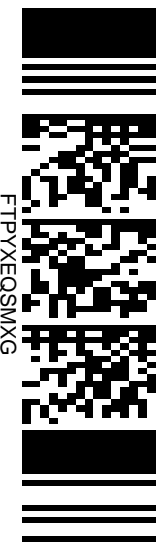


FTPYEQSMXG

estatuto especial", agregando su inciso 3° que, "con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contraria a estos últimos", de manera que la forma de interpretación del juez a quo atenta contra la propia normativa al momento de calificar como vulneración una causal de término de la relación estatutaria, como lo es la remoción de un cargo. Agrega que el caso sub-lite no se rige por una relación contractual laboral, sino más bien una relación estatutaria de carácter pública.

También indica que se infringen los artículos 1, 2 y 5 de la Ley N° 18.883; los artículos 30, 40, 47, 53, 56, 63 letras c) e i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y los artículos 144 letra c), en relación al artículo 147 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.

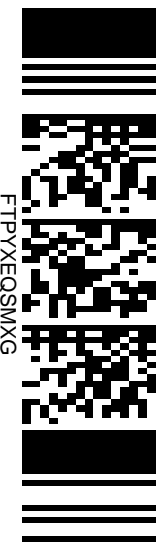
En síntesis, refiere que quienes desempeñan un empleo a contrata son considerados funcionarios públicos, y como tales, deben velar por el irrestricto cumplimiento de los principios que inspiran a la administración, entre ellos, el de probidad administrativa y luego -también-, cumplir con todas sus obligaciones que, en lo particular, se encuentran descritas en el artículo 58 del estatuto supra escrito. Añade que, a diferencia de lo que ocurre con un funcionario de planta, y teniendo en cuenta la



FTPYEQSMXG

naturaleza transitoria o precaria del empleo a contrata, a éste puede ponérsele término anticipado a su contrato por "no ser necesarios sus servicios", y esas mismas disposiciones, y de las restantes normas de la Ley N°18.883, aparece de manifiesto que el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales establece su propia regulación en torno a las calidades funcionarias que pueden formar parte de una dotación institucional, y en cuanto a las causales de expiración de los cargos contratados y sus disposiciones, rigen con preferencia a quienes integran una dotación como la de que se trata, excluyendo el imperio del derecho laboral común de esos asuntos, al tenor de lo preceptuado tanto en el artículo 1 del ya referido Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales; en los incisos segundo y tercer del artículo 1 del Código del Trabajo, como también en el artículo 13 del Código Civil.

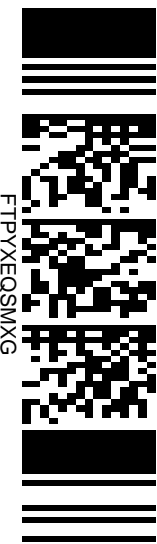
Menciona que los propios denunciantes han reconocido dicha calidad en su libelo, al señalar expresamente que fue contratada de acuerdo a la denominación "contrata", en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, lo que reafirma su modalidad de contratación, en calidad de servidor público. Expresa que, a su respecto, no existe confianza legítima, entendiéndola como aquella que nace -de acuerdo lo ha establecido la Contraloría General de la República-, cuando luego de dos o más renovaciones el empleado se ha desempeñado por dos



años o más en la administración, cuestión que le convence de volver a ser nombrado en las mismas condiciones para el siguiente año calendario, y en tales consideraciones, puede la Administración ponerle término a su empleo en cualquier tiempo, sin que aquello se traduzca en un menoscabo del funcionario, pues como se ha dicho, sus servicios resultan ser transitorios, concluyendo que ninguno de los denunciante goza del principio de confianza legítima, como se trata de manifestar de forma confusa, ya que la contraria manifiesta ligeramente que el acto sería infundado, sin embargo, se deja expresamente constatado en el acto administrativo, que el denunciante no reviste del carácter ya explicado, procediendo, por tanto, a lo dictaminado en las propias disposiciones de la Contraloría General de la República.

Afirma que la única cuestión que se requiere es que la decisión de no renovar la contratación sea fundada, y que el Decreto que así lo disponga contemple las causales invocadas para la decisión, tal como ocurre en la especie, por lo que no se puede dirigir ataque de legalidad en contra del mencionado Decreto, ya que se basó estrictamente en la normativa aplicable, por lo que se encuentran ajustados a la legalidad, y por ende, su aplicación no puede ser cuestionada.

Sostiene que la decisión de no aplicar correctamente lo prescrito, respecto de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere



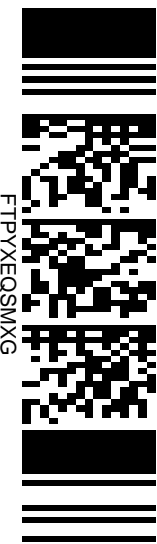
a la Administración, entre los que se mencionaron los artículos 1, 2 y 5 de la Ley N° 18.883, relacionados con los artículos 30, 40, 47, 56, 63 letras c) e i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, ha hecho que la sentencia haya incurrido en una infracción a todas las normas legales citadas, influyendo aquello en lo dispositivo del fallo, pues de haberse entendido que los Decretos Alcaldicios se bastan a sí mismos para determinar la voluntad de la Municipalidad, y no de cuestiones ajenas como lo plantea, se hubiese rechazado la tutela de autos, ya que la misma se acoge en clara infracción a las normas antes citadas.

SEGUNDO: Que, en subsidio de la causal anterior, invoca el motivo de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en relación a lo dispuesto en el artículo 456 del mismo cuerpo legal.

Dice que amén de la omisión del análisis de la prueba rendida en autos, de todos modos se configura, en la especie, la causal que ahora se hace referencia, por cuanto las reglas de la sana crítica fueron quebrantadas en la sentencia censurada por esta vía, en razón del análisis de las pruebas allegadas al proceso y la forma como fueron ponderadas, sobre todo lo que dice en relación con los comentarios que

realizó el Sr. Alcalde en distintas plataformas de difusión online.

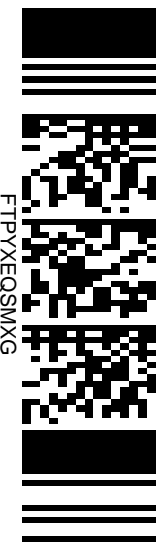
Luego de reproducir los considerandos Duodécimo y Decimotercero del fallo recurrido, y referir antecedentes doctrinarios, afirma que existiría una evidente falta a la lógica en la apreciación a la prueba, por cuanto el sentenciador utiliza, como elemento fundante de la supuesta vulneración, una sola publicación, la publicación de fecha 01 de julio de 2021, la cual señala *"voy a sacar solo a los apitutados"*, realizada por el alcalde de manera genérica en medios de comunicación tecnológicos, y que analizada toda la prueba, no podrá encontrar ningún atisbo de indicio que dé cuenta de declaraciones, amenazas o vejaciones que atenten contra la honra y de manera directa en contra de cada uno de los denunciantes de esta causa. Considera que es curiosa la conclusión que realiza el sentenciador en cuanto a dar por hecho que las personas desvinculadas en el inicio del periodo alcaldicio del actual Alcalde tienen la calidad de *"apitutados"*, toda vez que no existe prueba que dé cuenta de lo anterior. Agrega que, en relación a la supuesta lista que se tuvo por acompañada por la contraria, más que una lista, se trata de capturas de pantallas de la plataforma Whatsapp, en el cual existen la enumeración de ciertas personas que coinciden con los denunciantes, sin embargo, como pudo corroborarse por los testigos de esta parte, nunca nadie tuvo en su poder tal lista y no puede siquiera considerarse como algún documento



oficial emanado por la Municipalidad, por lo anterior, el criterio utilizado infringe de manera sustancial las reglas de la sana crítica emanadas de la normativa vigente.

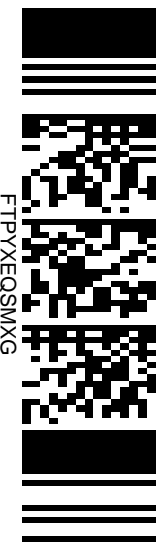
Afirma que la Municipalidad fundamentó de manera adecuada la desvinculación de los denunciantes, de hecho los Decretos Alcaldicios cumplen plenamente el principio de legalidad, no siendo la motivación de ellos discutida, por lo tanto, se debe estar a éstos para determinar la voluntad de la Municipalidad. De esta forma, la interpretación correcta del artículo 493 del Código del Trabajo es aquella que asume como ciertas las siguientes afirmaciones: 1) Dicha norma altera la carga material de la prueba, esto es, la distribución del costo del hecho que haya quedado indeterminado por medios probatorios, en otras palabras, la norma ordena una rebaja o alivio de la carga de la prueba al exigir un menor estándar de prueba al trabajador; 2) La regla que contiene, se encuentra dirigida únicamente al juez para ser aplicada al momento de dictar sentencia; 3) Los hechos sobre los que versa la prueba indiciaria no dicen relación directa sobre el hecho principal denunciado, y; 4) La regla que contiene no corresponderá aplicarla cuando el trabajador haya logrado la prueba del hecho lesivo mediante prueba directa o cuando el empleador haya logrado acreditar los hechos constitutivos de una justificación objetiva y proporcional de su conducta.

Asevera que se puede establecer con claridad que el fallo no ha cumplido con el estándar valorativo de



la sana crítica toda vez que construyó una situación fáctica con infracción al principio de la lógica formal, esto es, la no contradicción, el del tercero excluido y el de razón suficiente, en otras palabras, se dieron por acreditadas cuestiones que a la luz de lo ya expuesto fueron meros sucesos inconexos con las propias desvinculaciones de los denunciantes. Añade que la sentencia ha infringido las máximas de la experiencia, que han sido conceptualizadas como definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos y que se traducen, en la práctica, en el conocimiento que se tiene de lo usual, de lo acostumbrado y las cosas que acontecen de acuerdo al sentido común. El Juez no reflexionó, ni aplicó, la deducción que corresponde para que, conforme a las normas de la lógica y de la hermenéutica, arribara a la conclusión más coherente con la realidad: la inexistencia de vulneraciones de derechos fundamentales de los actores, considerando que logró acreditar que los actos vulneratorios no fueron tales.

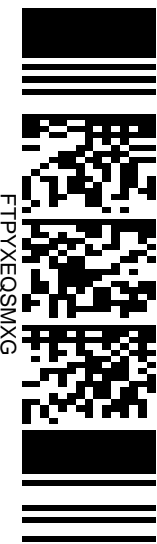
Concluye que la sentencia no justifica de manera racional el motivo de su conclusión, la que resulta incongruente con los medios de prueba incorporados al juicio, por ende, lo propuesto por el sentenciador no alcanza la certidumbre suficiente y necesaria que dé



razonabilidad respecto de aquel punto, al que no poder ser demostrado, es decir, se desconocen suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera, como el principio de razón suficiente, infracción que conforme los antecedentes sí resulta patente. De este modo, al haberse quebrantado las normas reguladoras de la prueba, esto es, la valoración de la misma conforme a las reglas de la sana crítica, se llegó a una conclusión errada de entender que la absolución percibida se debió a razones sin fundamentación por parte de su representada, toda vez que, como ya se explicó, la rusticación se encuentra determinada en lo concluido por el propio sentenciador, sin embargo, su apreciación se encuentra errada, contraviniendo abiertamente sobre todo el principio de la lógica, las máximas de experiencia y los principios científicamente afianzados.

TERCERO: Que, en primer lugar, en cuanto a la causal del artículo 477 del Código del Trabajo referida a la infracción de ley, en el sentido en que la funda el recurrente, persigue verificar que la ley haya sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia.

En razón de ello, la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este Tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros y, en particular, sin que pueda prescindirse

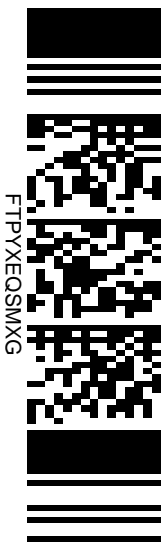


tampoco de los que fueran determinados en el fallo.

CUARTO: Que en este orden de ideas, quedaron asentados en la sentencia recurrida, en lo que aquí interesa, según se aprecia de los Considerandos Segundo, Décimo, Undécimo y Duodécimo, los siguientes hechos:

1.- Los demandantes prestaron servicios a contrata para la Municipalidad de Antofagasta y sus remuneraciones corresponden a la Tabla General de Remuneraciones de funcionarios municipales desde el 01 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. En el caso de: 1) Melissa Matthews Godoy, nombramiento a Contrata, prestó servicios por 10 meses y 17 días, o 322 días respectivamente, con una remuneración de \$1.462.949.-; 2) Andrés Espinoza Lorca, prestó servicios por 10 meses y 17 días, o 322 días respectivamente, y su remuneración era de \$2.045.696.-; 3) Matías Hernández Farías, nombramiento a Contrata, grado 11, prestó servicios por 2 meses y 15 días, o 77 días respectivamente, con una remuneración de \$1.250.485.-; 4) José Antonio Salazar Fernández, nombramiento a Contrata, prestó servicios por 5 meses y 23 días, o 175 días respectivamente, con una remuneración de \$2.045.696.-; y 5) Adolfo Monteiro Zoeson, nombramiento a Contrata, prestó servicios por 10 meses y 22 días, o 327 días, con una remuneración de \$2.045.696.- (Considerando Segundo, se reconoce por la demandada)

2.- El alcalde asume el cargo el día 28 de junio de 2021.



3.- Con fecha 14 de julio de 2021 se dispone el término anticipado de las contratas de los demandantes.

4.- Los denunciantes no se encontraban al momento de la desvinculación sujetos a investigación en proceso administrativo de sumario ni registraban deudas pecuniarias.

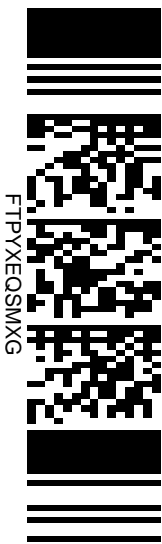
5.- No se advierte de la conducta de los demandantes actos o faltas que motivaron la desvinculación antes del término natural de sus respectivas contratas.

6.- El alcalde, luego de ser electo, y habiendo asumido funciones, declaró públicamente en medios de comunicación el 01 de julio de 2021 que *"voy a sacar sólo a los apitutados"*

7.- Las desvinculaciones lesionaron el prestigio laboral de los denunciantes, su honra laboral, el prestigio, la autopercepción funcionaria.

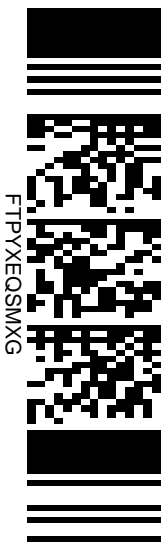
QUINTO: Que en razón de los hechos establecidos en la sentencia, es posible afirmar que el recurrente no ha respetado los límites fácticos contenidos en el fallo, y que la causal invocada le obliga a hacerlo, de manera que sólo se puede concluir que el sentenciador aplicó correctamente las normas que, según la parte demandada, se infringieron en la dictación de la sentencia, como asimismo, de forma correcta no hizo aplicación de aquellas disposiciones, que según el recurrente, se habrían omitido.

En efecto, establecido como lo ha sido en la sentencia que los actores fueron desvinculados de



manera anticipada, mediante un decreto sin fundamentación en cuanto al término anticipado de los servicios, y sin haberse invocado la pérdida de confianza que supone el cargo que desempeñaban los demandantes, la única conclusión posible frente a tales hechos es que en la remoción de sus cargos se vulneraron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, como lo es el derecho a la honra, ya que precedieron a la desvinculación expresiones y publicaciones del alcalde, quien manifestó que sacaría del municipio a funcionarios "apitutados", procediendo, luego, a desvincular a los actores, por lo que adecuadamente así lo estableció el sentenciador *a quo*, en cuanto a que se vulneró la honra de los demandante con el término anticipado y sin motivo justificado de las contratas.

Por otra parte, habiéndose establecido de manera expresa en la sentencia recurrida que la desvinculación anticipada de los demandantes no obedeció a algún motivo legal justificado, carece de todo sustento el fundamento de la causal invocada de modo principal, pues no respeta el sustento fáctico del fallo al invocar la discrecionalidad que tiene el alcalde frente a los funcionarios a contrata, pero ello bajo ningún respecto se justifica frente a la vulneración patente de derechos garantizados en la Constitución, los que no pueden ceder ante textos legales de menor jerarquía.

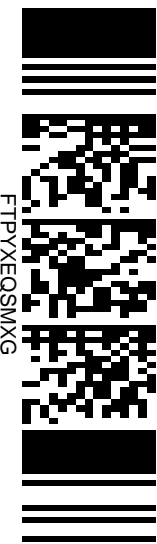


Por consiguiente, la causa principal de nulidad que invoca el recurrente, debe necesariamente rechazarse.

SEXTO: Que en cuanto a la segunda causal de nulidad que se invoca de modo subsidiario por la parte demandada en el presente arbitrio, referida a que la sentencia habría sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, es preciso señalar que el artículo 456 del Código del Trabajo establece que: *"... el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador."*

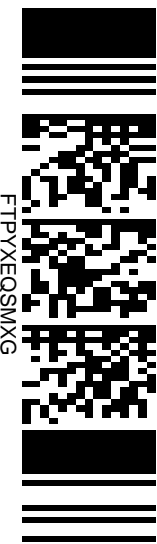
De este modo, esta causal de nulidad se produce cuando en la valoración de la prueba efectuada por el sentenciador, se violentan las reglas de la lógica, o las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados.

Se trata en este caso, además, de un vicio formal que exige que la infracción de las reglas de valoración de la prueba sea "manifiesta", esto es, evidente, ostensible, indudable, lo que no permita arribar naturalmente a la configuración de los hechos que se dieron por sentados en la sentencia, y con



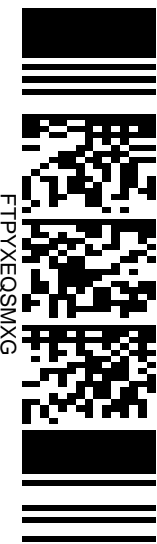
ello, a la decisión adoptada por el sentenciador en cuanto al litigio puesto en la esfera de su conocimiento.

En el presente caso, la causal invocada no se manifiesta, pues, revisada la sentencia recurrida, se advierte que el Juez hace un detallado análisis de la prueba rendida y razona abundantemente sobre ello, como se aprecia en los considerandos Décimo y siguientes que el recurrente también reproduce en parte, y en definitiva, los hechos establecidos por el Tribunal a quo y sobre los cuales sustenta su decisión, resultan coherentes, sin que se advierta de modo alguno que el sentenciador haya apreciado incorrectamente la prueba que se le aportó, lo que queda especialmente comprobado del análisis de lo razonado en el motivo Duodécimo del fallo recurrido, cuando señala: *"Que, es de relevancia para concluir que hubo expresiones y comentarios en medios de comunicación y redes sociales del actual alcalde cuando era candidato sin embargo se estima que dichos comentarios no son vinculantes para efectos de este juicio porque quien los profirió aun no asumía la jefatura de los denunciantes, lo que sirve solo de antecedentes, sin embargo la publicación del fecha 01 de julio de 2021 señala que "voy a sacar solo a los apitutados" en esa publicación de medios de comunicación ya había asumido la responsabilidad edilicia estimándose contextualmente de otra manera sus declaraciones ya no como meros antecedentes indiciarios sino que como una declaración directa del*



alcalde, lo que si determina el indicio indicado en la denuncia, de acuerdo al documento 6,3 de la parte denunciante. Que, se incorporó documentalmente en el proceso dentro de la que aparecen los nombres de los 5 denunciantes del juicio, filtración de comunicación de Whatsapp de la lista de los supuestos futuros desvinculados donde aparecen los nombres de los 5 denunciantes, que esto además fue contextualizado por dos testigos, que son concejales de la comuna, que declararon cada uno en su oportunidad la auto convocación al asumir sus cargos en una sesión de consejo extraordinaria, para que el alcalde explicara en que consiste el plan 9 y cuál es el objetivo de la lista, recibiendo como respuesta que se trataba de deudores, con lo que se estima configurado un indicio adicional por cuanto los decretos de termino anticipados incorporados al proceso indican expresamente que los denunciantes no tienen la calidad de deudores pecuniarios del municipio.

Que, en esa circunstancias al ser desvinculado a las pocos días de asunción del alcalde, en circunstancias de las declaraciones efectuadas por él, que le presidian de desvincular solo a los apitutados documento 6.3 de la parte denunciante, se puede desprender que tales desvinculaciones lesionaron el prestigio laboral de los denunciantes, ya que el motivo por el que fueron desvinculados fue precisamente por las razones que el recién asumido alcalde dio a la opinión pública a conocer y que fueron concretadas en los hechos en la personas de



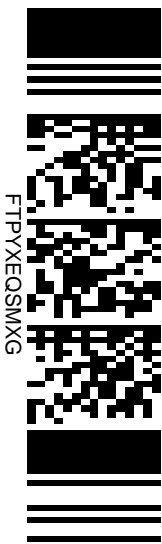
los denunciantes, por lo anterior se estima que la desvinculación lesiona, precisamente la honra laboral, el prestigio, la autopercepción funcionaria, en consecuencia el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República”.

Como se observa, en nada se aparta el sentenciador del análisis lógico que supone el empleo de las reglas de la sana crítica, motivo suficiente para que la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, planteada de modo subsidiario, deba rechazarse.

En cuanto al recurso de los demandantes.

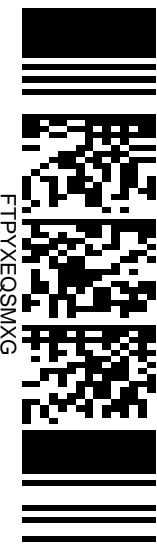
SÉPTIMO: Que la parte demandante invocó como motivo de nulidad de la sentencia, el haber sido dictada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Luego de reproducir los considerandos Noveno a Decimosexto, señala que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, según el cual la indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, por lo que hay que considerar las utilidades probables según el curso normal de los hechos, debiendo para ello el acreedor proporcionar los antecedentes que permitan determinar una ganancia probable que dejó de percibir. Agrega que se logró acreditar en el juicio, y a aquello se refiere el considerando Décimo Primero de la sentencia recurrida, que la Municipalidad de Antofagasta puso término anticipado a las contrataciones de las demandantes sin fundamento legal y vulnerándoles



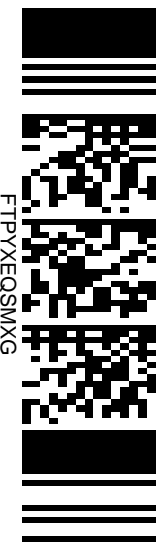
sus derechos fundamentales, precisamente su honra, y como consecuencia de aquel término anticipado de sus contratas, sin fundamento alguno que lo justifique, transforma a la Municipalidad de Antofagasta en una contraparte negligente que no cumplió su obligación de mantener la contrata de sus representados hasta el 31 de diciembre de 2021, existiendo presupuesto municipal para aquello, con lo cual los denunciante no pudieron continuar con la prestación de sus servicios durante el año 2021 y se les privó del legítimo derecho de percibir las remuneraciones que les correspondía por aquella prestación de servicios dispuesta hasta el 31 de Diciembre de 2021, lo cual habría ocurrido normalmente sino hubiera existido la vulneración de derechos constatada, vale decir, desvinculando a sus representados como una concreción de las amenazas de despido de los funcionarios apitutados que había vertido el alcalde poco después de asumir el cargo. Por lo anterior, sostiene que se debe dar lugar a la indemnización requerida por lucro cesante y resarcir el perjuicio ocasionado a cada uno de sus clientes con el pago íntegro de las remuneraciones que les habría tocado percibir desde el 15 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, según los montos que en cada caso se determine que corresponda de acuerdo a sus remuneraciones mensuales.

Indica que si bien el Código del Trabajo no contempla expresamente la indemnización del lucro cesante, esta rama del derecho no puede considerarse aislada del ordenamiento jurídico en general, siendo



procedente que el contratante cumplidor pueda exigir a la contraparte que cumpla lo pactado, o bien, a lo que se ha obligado, como empleador o quien requiere los servicios personales de otro, esto es, a otorgar el trabajo comprometido y pagar las remuneraciones asociadas a la prestación de esos servicios por el tiempo convenido, en el caso que nos ocupa, hasta el 31 de diciembre de 2021.

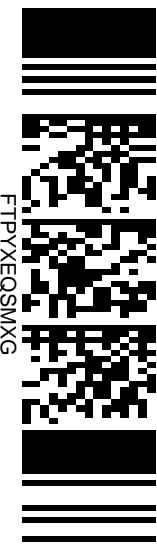
Refiere que si se hubiera aplicado correctamente la norma del artículo 1556 del Código Civil a los hechos fijados por el Tribunal a quo, se hubiera dado lugar a la indemnización por el lucro cesante, entendiendo procedente el pago de las remuneraciones que hubiere correspondido a los actores por el tiempo que faltaba hasta el 31 de diciembre de 2021, según el curso normal de los hechos. Por el contrario, el la sentencia confunde la correcta aplicación de esta norma a que hubiera existido una vulneración de derechos por "la aplicación de la causa justificada formalmente por no ser necesarios los servicios, por lo que no se configura lucro cesante" y además confunde su procedencia con que "tampoco se da la confianza legítima por cuanto la fecha en que los denunciante pasan a contrata no permite tener el periodo creado por la jurisprudencia administrativa". De este modo, si hubiera aplicado correctamente el artículo 1556 del Código Civil a los hechos acreditados en el juicio, necesariamente se habría concedido el lucro cesante demandado, por lo que la infracción de ley denunciada ha influido



sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En otro orden, también afirma que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo que señala "Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 163, 163 bis, 168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad".

Expresa que para entender la infracción denunciada al artículo 172 del Código del Trabajo, se debe, primero, hacer referencia a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 489 del mismo cuerpo legal, que señala "En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual". Pues bien,

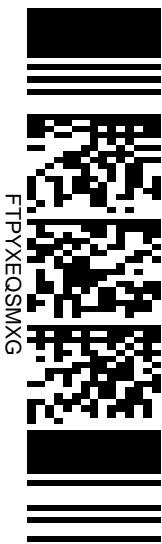


al aludir esta indemnización adicional consagrada en el referido artículo 489 al concepto última remuneración mensual, necesariamente debe recurrirse a la acepción legal consagrada en el propio Código del Trabajo, de conformidad a las normas de interpretación de las leyes del Código Civil, así, debe recurrirse a lo dispuesto en el artículo 172, ya citado.

Afirma que yerra el Juez a quo en el considerando Décimo cuando establece las bases de cálculo de las indemnizaciones que debe pagar la Municipalidad de Antofagasta y no considera en las mismas las asignaciones de zona de cada uno de sus representados, asignación que en realidad corresponde a un adicional pagado a algunos funcionarios públicos en atención al lugar geográfico donde desempeñan sus funciones, de carácter mensual y además fijo.

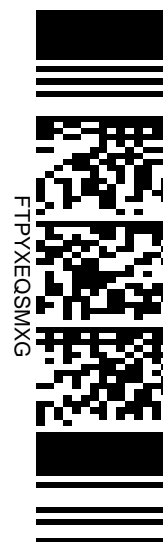
Agrega que la asignación de zona no debe ser excluida de la base de cálculo porque significa una contravención a lo dispuesto en el artículo 172 ya citado, que no permite su exclusión como si lo hace con la asignación familiar, las horas de sobretiempo y los beneficios esporádicos o por una sola vez, así como tampoco puede excluirse la asignación de zona en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo.

Concluye que esta infracción denunciada influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues afecta a la base de cálculo que permite fijar las indemnizaciones a pagar a sus representados, de manera que si no se hubiera excluido la asignación de zona



respecto de: 1) Doña Melissa Matthews Godoy, el monto que sirve de base de cálculo sería de \$2.105.117.- y no \$1.462.949.- como se determinó en la sentencia recurrida; 2) de don Andrés Espinoza Lorca, sería \$ 3.005.104.- y no \$2.046.696.- como se señala en la sentencia recurrida; 3) de don Matías Hernández Farías, sería \$2.105.117.- y no \$1.250.485.- como se señala en la sentencia recurrida; 4) de don José Salazar Fernández, sería \$2.871.011.- y no \$2.046.696.- como se señala en la sentencia recurrida; y 5) respecto de don Adolfo Monteiro Zoeson, sería \$2.854.471.- y no \$2.046.696.- como se señala en la sentencia recurrida, con lo cual la infracción denunciada influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo al terminar condenando a la demandada al pago de seis remuneraciones mensuales como indemnización adicional con una base de cálculo de remuneración mensual de menor monto.

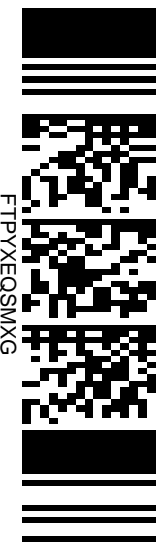
Finalmente, solicita que se acoja el recurso y se proceda a invalidar parcialmente la sentencia recurrida acogiendo la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 inciso primero segunda parte del Código del Trabajo, declarando que ha sido dictada conteniendo una infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por no haber aplicado debidamente los artículos 1556 del Código Civil y 172 del Código del Trabajo, declarando que la sentencia definitiva es nula, procediendo a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo donde se mantenga la condena a pagar la indemnización



adicional prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo por la vulneración de derechos constatada, pero considerando la última remuneración mensual como lo ordena el artículo 172 del Código del Trabajo, esto es, sin exclusión de la asignación de zona por los montos correctos que se señalan en el cuerpo de esta presentación y, además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1556 del Código Civil, se dé lugar a la indemnización del lucro cesante conforme fue demandado, o bien, si se estima pertinente, ordenar la realización de un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado, todo ello con costas.

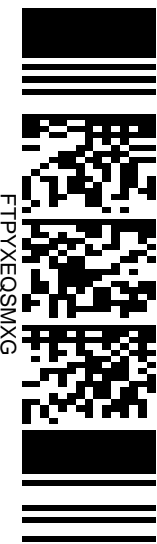
OCTAVO: Que para decidir sobre esta causal de nulidad, se debe tener en consideración que no resulta posible modificar los hechos establecidos en la sentencia y que se ha indicado en los motivos precedentes, por lo que la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este Tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros y, en particular, sin que pueda prescindirse tampoco de los que fueran determinados en el fallo.

En este orden de ideas, se advierte de manera clara que el recurrente no ha respetado los límites fácticos contenidos en el fallo, y que la causal invocada le obliga a aceptar, de manera que sólo puede concluirse que el sentenciador aplicó correctamente las normas que, según la parte demandada, se infringieron en la dictación de la sentencia, como asimismo, de manera correcta no hizo aplicación de



aquellas disposiciones, que según el recurrente, se habrían omitido.

En efecto, establecido como lo ha sido en la sentencia, que los actores se encontraban vinculados con la Municipalidad de Antofagasta en virtud de una relación regida principalmente por la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, lo que reafirma su modalidad de contratación en calidad de servidores públicos, y teniendo en cuenta que se trata de cargos públicos regidos por un sistema estatutario diferente al Código del Trabajo, pero que conforme a la jurisprudencia le son aplicables la normas sobre tutela laboral a dichos funcionarios, no puede tampoco dejar de considerarse que los denunciantes prestaron servicios a la Municipalidad por períodos inferiores a un año, en virtud de una contrata transitoria y con pleno conocimiento que se apostaba un cambio de autoridades que podría significar alteraciones en la contratación y mantención de funcionarios, especialmente respecto de los que prestaban funciones bajo el régimen de contrata transitoria, por lo que los efectos o consecuencias de la desvinculación de que fueron objeto los denunciantes, no podían menos que ser previstos por ellos, de manera que la indemnización que se pretende no les resulta aplicable, por no encontrarnos frente a un contrato de carácter civil, sino que las partes se rigen por un estatuto de orden público ajeno a las indemnizaciones y prestaciones que el derecho privado establece para quienes contratan en



ese orden jurídico.

En consecuencia, no existiendo infracción de las normas indicadas por el recurrente, se debe, asimismo, rechazar el presente arbitrio.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechazan** los recursos de nulidad interpuestos por el Abogado FELIPE JULIO ARAYA, por la parte demandada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA; y el deducido por el abogado JORGE MAYNE MOLLER, por los demandantes, en contra de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el juez destinado Ricardo Andrés Alveal Venegas del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, en causa RIT N° T-402-2021, RUC N° 2140363307-8, la que, en consecuencia, **no es nula**.

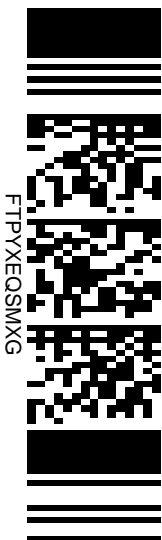
Se deja constancia que se hizo uso de la facultad contenida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

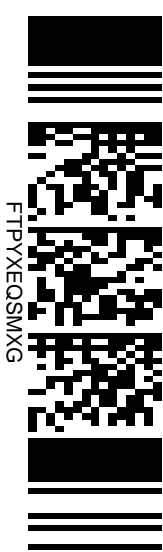
Regístrese y comuníquese.

Rol 617-2022 (Laboral)

Redactada por el Ministro Titular Sr. Eric Darío Sepúlveda Casanova.

No firma el Ministro Titular Sr. Dinko Franulic Cetinic, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

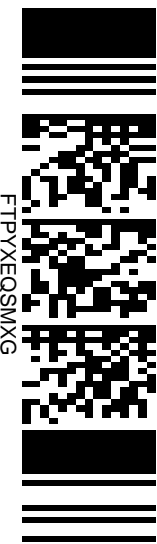




FTPYXEQSMXG

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta integrada por Ministro Eric Dario Sepulveda C. y Abogada Integrante Luisa Ida Cortes S. Antofagasta, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

En Antofagasta, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.